

No. 34527

**SPAIN
and
ECUADOR**

Treaty for the promotion and reciprocal protection of investments. Signed at Quito on 26 June 1996

Authentic text: Spanish.

Registered by Spain on 27 April 1998.

**ESPAGNE
et
ÉQUATEUR**

Accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements. Signé à Quito le 26 juin 1996

Texte authentique : espagnol.

Enregistré par l'Espagne le 27 avril 1998.

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE
INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

El Reino de España y la República del Ecuador, en adelante "Las Partes Contratantes",

deseando intensificar la cooperación económica en beneficio recíproco de ambos países,

proponiéndose crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por inversionistas de cada una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra,

y

reconociendo que la promoción y protección de las inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimula las iniciativas en este campo,

han convenido lo siguiente:

ARTICULO I

DEFINICIONES

A los efectos del presente Acuerdo:

1.- Por "inversionistas" se entenderá:

a) personas naturales que, en el caso del Reino de España, son considerados sus nacionales con arreglo a su legislación y, con respecto a la República del Ecuador, las personas naturales que, de conformidad con la legislación ecuatoriana, son considerados nacionales del Ecuador.

b) personas jurídicas, incluidas compañías, asociaciones de compañías, sociedades mercantiles y otras organizaciones que

se encuentren constituidas o, en cualquier caso, debidamente organizadas según el derecho de esa Parte Contratante y tengan su sede en el territorio de esa misma Parte Contratante.

2.- Por "inversiones" se designa todo tipo de haberes, tales como bienes y derechos de toda naturaleza, adquiridos de acuerdo con la Legislación del país receptor de la inversión y en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes:

- acciones y otras formas de participación en sociedades;
- derechos derivados de todo tipo de aportaciones realizadas con el propósito de crear valor económico; se incluyen expresamente todos aquellos préstamos concedidos con este fin, hayan sido o no capitalizados;
- bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales tales como hipotecas, derechos de prenda, usufructos y derechos similares;
- todo tipo de derechos en el ámbito de la propiedad intelectual, incluyendo expresamente patentes de invención y marcas de comercio, así como licencias de fabricación y know-how;
- derechos para realizar actividades económicas y comerciales otorgados por la Ley o en virtud de un contrato, en particular los relacionados con la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales.

3.- El término "rentas de inversión" se refiere a los rendimientos derivados de una inversión de acuerdo con la definición contenida en el punto anterior, e incluye, expresamente, beneficios, dividendos e intereses.

4.- El término "territorio" designa el territorio nacional sobre el que cada una de las Partes Contratantes tiene jurisdicción o soberanía de conformidad con el Derecho Internacional y la Legislación de cada una de las Partes Contratantes.

ARTICULO II

PROMOCION, ADMISION

1.- Cada Parte Contratante promocionará, en la medida de lo posible, las inversiones efectuadas en su territorio por

inversionistas de la otra Parte Contratante y admitirá estas inversiones conforme a sus disposiciones legales.

2.- El presente Acuerdo se aplicará también a las inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del mismo por los inversionistas de una Parte Contratante conforme a las disposiciones legales de la otra Parte Contratante en el territorio de esta última.

ARTICULO III

PROTECCION

1.- Cada Parte Contratante protegerá en su territorio las inversiones efectuadas, conforme a su legislación, por inversionistas de la otra Parte Contratante y no obstaculizará, mediante medidas injustificadas o discriminatorias, la gestión, el mantenimiento, la utilización, el disfrute, la extensión, la venta ni, en su caso, la liquidación de tales inversiones.

2.- Cada Parte Contratante se esforzará por conceder las autorizaciones necesarias en relación con estas inversiones y permitirá, en el marco de su legislación, la ejecución de contratos laborales, de licencia de fabricación, asistencia técnica, comercial, financiera y administrativa.

3.- Cada Parte Contratante se esforzará igualmente, cada vez que sea necesario, en otorgar las autorizaciones requeridas en relación con las actividades de consultores o expertos contratados por inversionistas de la otra Parte Contratante.

ARTICULO IV

TRATAMIENTO

1.- Cada Parte Contratante garantizará en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones realizadas por inversionistas de la otra Parte Contratante.

2.- Este tratamiento no será menos favorable que el otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones realizadas en su

territorio por inversionistas de un tercer país que goce del tratamiento de Nación Más Favorecida.

3.- Este tratamiento no se extenderá, sin embargo, a los privilegios que una Parte Contratante conceda a los inversionistas de un tercer Estado, en virtud de su participación en:

- Una zona de libre comercio,
- Una unión aduanera,
- Un mercado común o
- Una organización de asistencia económica mutua o en virtud de un Acuerdo firmado antes de la fecha de la firma del presente Convenio que prevea disposiciones análogas a aquéllas que son otorgadas por esa Parte Contratante a los participantes de dicha organización.

4.- El tratamiento concedido con arreglo al presente artículo no se extenderá a deducciones, exenciones fiscales u otros privilegios análogos otorgados por cualquiera de las Partes Contratantes a inversionistas de terceros países en virtud de un Acuerdo para evitar la Doble Imposición o de cualquier otro Acuerdo en materia de tributación.

5.- Además de las disposiciones del párrafo 2 del presente artículo, cada Parte Contratante aplicará, con arreglo a su Legislación Nacional, a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante un tratamiento no menos favorable que el otorgado a sus propios inversionistas.

ARTICULO V

NACIONALIZACION Y EXPROPIACION

La nacionalización, expropiación, o cualquier otra medida de características o efectos similares que pueda ser adoptada por las autoridades de una Parte Contratante contra las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante en su territorio, deberá aplicarse exclusivamente por razones de utilidad pública conforme a las disposiciones legales y en ningún caso será discriminatoria. La Parte Contratante que adoptara estas medidas pagará al inversionista o a su derechohabiente, sin demora injustificada, una indemnización adecuada, en moneda convertible y libremente transferible.

ARTICULO VI

COMPENSACION POR PERDIDAS

A los inversionistas de una Parte Contratante cuyas inversiones o rentas de inversión en el territorio de la otra Parte Contratante sufran pérdidas debidas a guerra, otros conflictos armados, un estado de emergencia nacional u otras circunstancias similares en el territorio de esta última, se les concederá, a título de restitución, indemnización, compensación u otro acuerdo, tratamiento no menos favorable que aquél que la última Parte Contratante conceda a inversionistas de cualquier tercer Estado. Cualquier pago hecho de acuerdo con este Artículo será realizado de forma pronta, adecuada, efectiva y libremente transferible.

ARTICULO VII

TRANSFERENCIA

Cada Parte Contratante otorgará a los inversionistas de la otra Parte Contratante, con respecto a las inversiones realizadas en su territorio, la posibilidad de transferir libremente las rentas de esas inversiones y otros pagos relacionados con las mismas, y en particular, pero no exclusivamente, los siguientes:

- las rentas de inversión, tal y como han sido definidas en el Artículo I;
- las indemnizaciones previstas en el Artículo V;
- las compensaciones previstas en el Artículo VI;
- el producto de la venta o liquidación, total o parcial, de las inversiones;
- los sueldos, salarios y demás remuneraciones recibidos por los ciudadanos de una Parte Contratante que hayan obtenido en la otra Parte Contratante los correspondientes permisos de trabajo en relación con una inversión.

Las transferencias se harán en divisas libremente convertibles.

La Parte Contratante receptora de la inversión facilitará al inversionista de la otra Parte Contratante o a la sociedad en la que participa el acceso al mercado oficial de divisas en forma no discriminatoria, a fin de adquirir las divisas necesarias para realizar las transferencias amparadas en el presente Artículo.

Para la realización de las transferencias se tendrán que observar las obligaciones fiscales establecidas por la

legislación vigente en la Parte Contratante receptora de la inversión.

Las Partes Contratantes se comprometen a facilitar los procedimientos necesarios para efectuar dichas transferencias sin excesiva demora ni restricciones. En particular, no deberán transcurrir más de dos meses desde la fecha en que el inversionista haya presentado debidamente las solicitudes necesarias para efectuar la transferencia hasta el momento en que dicha transferencia se realice efectivamente. Por tanto, cada Parte Contratante se compromete a cumplir con las formalidades necesarias tanto para la compra de la divisa como para su transferencia efectiva al extranjero antes del término arriba mencionado.

ARTICULO VIII

CONDICIONES MAS FAVORABLES

Las condiciones más favorables que las del presente Acuerdo que hayan sido convenidas por una de las Partes Contratantes con los inversionistas de la otra Parte Contratante no se verán afectadas por el presente Acuerdo.

ARTICULO IX

PRINCIPIO DE SUBROGACION

En el caso de que una Parte Contratante haya otorgado cualquier garantía financiera sobre riesgos no comerciales en relación con una inversión efectuada por un inversionista de esa Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última aceptará una aplicación del principio de subrogación de la primera Parte Contratante en los derechos económicos del inversionista y no en los derechos reales, desde el momento en que ésta haya realizado un primer pago con cargo a la garantía concedida.

Esta subrogación hará posible que la primera Parte Contratante sea beneficiaria directa de todos los pagos por indemnización a los que pudiese ser acreedor el inversionista inicial. En ningún caso podrá producirse una subrogación en derechos de propiedad, uso, disfrute o cualquier otro derecho real derivado de la titularidad de la inversión sin la previa obtención de las autorizaciones pertinentes de acuerdo con la Legislación sobre inversiones extranjeras vigente en la Parte Contratante donde se realizó la inversión.

ARTICULO X

CONTROVERSIAS DE INTERPRETACION DEL CONVENIO ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES.

1.- Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretación o aplicación del presente Convenio será resuelta, hasta donde sea posible, por los Gobiernos de las dos Partes Contratantes.

2.- Si la controversia no pudiera resolverse de ese modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las negociaciones, será sometida, a petición de cualquiera de las dos Partes Contratantes, a un tribunal de arbitraje.

3.- El Tribunal de arbitraje se constituirá del siguiente modo: cada Parte Contratante designará un árbitro y estos dos árbitros elegirán a un ciudadano de un tercer Estado como presidente. Los árbitros serán designados en el plazo de tres meses, y el presidente en el plazo de cinco meses desde la fecha en que cualquiera de las dos Partes Contratantes hubiera informado a la otra Parte Contratante de su intención de someter la controversia a un tribunal de arbitraje.

4.- Si una de las Partes Contratantes no hubiera designado a su árbitro en el plazo fijado, la otra Parte Contratante podrá solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que realice dicha designación. En caso de que los dos árbitros no llegaran a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro, en el período establecido, cualquiera de las Partes Contratantes podrá acudir al Secretario General de las Naciones Unidas para que efectúe la designación pertinente.

5.- El Tribunal de arbitraje emitirá su dictamen sobre la base de respeto a la Ley, de las normas contenidas en el presente Convenio o en otros Acuerdos vigentes entre las Partes Contratantes, y sobre los principios universalmente reconocidos de Derecho Internacional.

6.- A menos que las Partes Contratantes lo decidan de otro modo, el Tribunal establecerá su propio procedimiento.

7.- El Tribunal adoptará su decisión por mayoría de votos y aquélla será definitiva y vinculante para ambas Partes Contratantes.

8.- Cada Parte Contratante correrá con los gastos del árbitro por ella designado y los relacionados con su representación en los procedimientos arbitrales. Los demás gastos incluidos los del Presidente serán sufragados, equitativamente, por ambas Partes Contratantes.

ARTICULO XI

CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE E INVERSIONISTAS DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE.

1.- Toda controversia relativa a las inversiones que surja entre una de las Partes Contratantes y un inversionista de la otra Parte Contratante respecto a cuestiones reguladas por el presente Acuerdo será notificada por escrito, incluyendo una información detallada, por el inversionista a la Parte Contratante receptora de la inversión. En la medida de lo posible las partes tratarán de arreglar estas diferencias mediante un acuerdo amistoso.

2.- Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta forma en un plazo de seis meses a contar desde la fecha de notificación escrita mencionada en el párrafo 1, será sometida a elección del inversionista:

- al tribunal de arbitraje "ad hoc" establecido por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional o

- al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I) creado por el "Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado parte en el presente Acuerdo se haya adherido a aquél.

3.- El arbitraje se basará en:

- las disposiciones del presente Acuerdo,
- el derecho nacional de la Parte Contratante en cuyo territorio se ha realizado la inversión, incluidas las reglas relativas a los conflictos de Ley y
- las reglas y principios de Derecho Internacional generalmente admitidos.

4.- Las sentencias de arbitraje serán definitivas y vinculantes para las partes en controversia. Cada Parte Contratante se compromete a ejecutar las sentencias de acuerdo con su legislación nacional.

ARTICULO XII

ENTRADA EN VIGOR, PRORROGA, DENUNCIA

1.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día en que las dos Partes Contratantes se hayan notificado mutuamente que las respectivas formalidades constitucionales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos internacionales han sido cumplidas. Permanecerá en vigor por un período inicial de diez años y se renovará tácitamente por períodos consecutivos de cinco años.

Cada Parte Contratante podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación previa por escrito, seis meses antes de la fecha de su expiración.

2.- En caso de denuncia, las disposiciones previstas en los artículos 1 al 11 del presente Acuerdo seguirán aplicándose durante un período de diez años a las inversiones efectuadas antes de la denuncia.

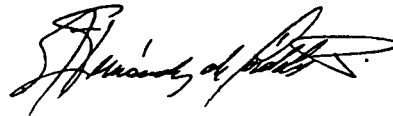
Hecho en dos originales en lengua española, que hacen igualmente fe, en Quito a 26 de junio de 1996.

Por el Reino
de España:



JULIO ALBI DE LA CUESTEA
Embajador de España

Por la República
del Ecuador:



MARCELO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA
Ministro de Relaciones
Exteriores, Encargado

[TRANSLATION — TRADUCTION]¹

TREATY² FOR THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION
OF INVESTMENTS BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND
THE REPUBLIC OF ECUADOR

The Kingdom of Spain and the Republic of Ecuador, hereinafter called “The Contracting Parties”,

Wishing to intensify economic co-operation to the reciprocal benefit of both countries,

Proposing to create conditions favourable to investments made by investors of each of the Contracting Parties in the territory of the other, and

Recognising that the promotion and protection of investments pursuant to this Agreement stimulate initiatives in this field,

Have agreed as follows:

Article 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

1. For “investors” shall be understood:

a) Natural persons who, in the case of the Kingdom of Spain, are considered to be its nationals under its law and, with respect to the Republic of Ecuador, natural persons who, under Ecuatorian law, are considered nationals of Ecuador;

b) Legal entities, including companies, associations of companies, mercantile societies and other organisations that have been incorporated or, in any event duly organised under the law of a Contracting Party and whose headquarters are located in the territory of that same Contracting Party.

2. For “investments” shall be understood all types of assets, such as goods and rights of all kinds acquired in accordance with the law of the country receiving the investment and in particular, although not exclusively, the following:

- Shares and other forms of holdings in companies;
- Rights derived from all types of contributions made for the purpose of creating wealth; explicitly included are all loans granted to this end, whether capitalised or not;
- Personal and immovable property, as well as other corporeal rights such as mortgages, securities, usufruct and similar rights;
- All types of rights in the sphere of intellectual property, explicitly including invention patents and trade marks, as well as manufacturing licences and know-how;

¹ Translation supplied by the Spanish Government — Traduction fournie par le Gouvernement espagnol.

² Came into force on 18 June 1997 by notification, in accordance with article XII.

— Rights to conduct economic and commercial activities authorised by law or by virtue of a contract, in particular those related to prospection, cultivation, extraction or exploitation of natural resources.

3. The term “Investment income” refers to the yields on an investment in accordance with the definition contained in the foregoing point, and explicitly includes profits, dividends and interests.

4. The term “territory” means the national territory over which each of the Contracting Parties holds jurisdiction or sovereignty pursuant to international law and the law of each of the Contracting Parties.

Article II

PROMOTION AND ACCEPTANCE

1. Each Contracting Party shall promote, in so far as possible, the investments made in its territory by investors of the other Contracting Party and shall accept these investments pursuant to its law.

2. This Agreement shall also be applicable to investments made before its entry into force by investors of a Contracting Party pursuant to the law of the other Contracting Party in the territory of the latter.

Article III

PROTECTION

1. Each Contracting Party shall protect in its territory those investments made, under its law, by investors of the other Contracting Party, and shall not impede through unjustified or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, enlargement, sale or, as the case may be, the liquidation of such investments.

2. Each Contracting Party shall make every effort to grant the necessary permits in connection with these investments and shall allow, within the framework of its legislation, the execution of labour contracts and manufacturing licences and the providing of technical, commercial, financial and administrative assistance.

3. Each Contracting Party shall likewise strive, whenever necessary, to grant the authorisations required in connection with the activities of consultants or experts employed by investors of the other Contracting Party.

Article IV

TREATMENT

1. Each Contracting Party shall guarantee in its territory fair and equitable treatment for the investments made by investors of the other Contracting Party.

2. This treatment shall be no less favourable than that granted by each Contracting Party to the investments made in its territory by investors of a third country that enjoys Most-Favoured-Nation Treatment.

3. This treatment shall not, however, be extended to the privileges that a Contracting Party grants investors from a third State by virtue of its participation in:

- A free trade area,
- A customs union
- A common market, or
- An organisation for mutual economic assistance or by virtue of an agreement signed before the date of the signature of this Agreement that includes provisions similar to those granted by that Contracting Party to the participants of said organisation.

4. The treatment granted pursuant to this article shall not be extended to deductions, tax exemptions or other similar privileges granted by either of the Contracting Parties to investors from third countries by virtue of a double taxation agreement or any other agreement relative to taxation.

5. In addition to the provisions of paragraph 2 of this article, each Contracting Party shall, pursuant to its domestic legislation, apply to the investments of investors of the other Contracting Party treatment no less favourable than that granted to its own investors.

Article V

NATIONALISATION AND EXPROPRIATION

Nationalisation, expropriation or any other measure of similar characteristics or effects that can be taken by the authorities of a Contracting Party against the investments of investors of the other Contracting Party in its territory, shall be applied exclusively for reasons of public benefit in accordance with regulations, and shall in no case be discriminatory. The Contracting Party which takes these measures shall, without unjustified delay, pay the investor or the rightful owner adequate compensation in freely-transferable convertible currency.

Article VI

COMPENSATION FOR LOSS

Investors from a Contracting Party whose investments or investment income in the territory of the other Contracting Party suffer losses on account of war, other armed conflicts, a state of national emergency or other similar circumstances in the territory of the latter shall be granted — as restitution — indemnity, compensation or some other agreed form of remuneration, as well as treatment no less favourable than that granted by the latter Contracting Party to investors of any third State. Any payments under this article shall be made promptly, satisfactorily, effectively and in a freely-transferable form.

Article VII

TRANSFERS

With respect to investments made in its own territory, each Contracting Party shall allow investors of the other Contracting Party to freely transfer the income from these investments and other payments related thereto and, in particular although not exclusively, the following:

- Investment income as defined under Article I;
- The indemnities provided under Article V;
- The compensation provided under Article VI;
- The product of the total or partial sale or liquidation of investments;
- The salaries, wages and other remuneration received by citizens of a Contracting Party who have obtained in the other Contracting Party the corresponding work permits related to an investment.

Transfers shall be made in freely-convertible foreign exchange.

The Contracting Party that receives the investment shall allow the investor of the other Contracting Party or the company in which he has holdings access to the official foreign exchange market on a non-discriminatory basis for the purpose of purchasing the necessary foreign exchange in order to make the transfers provided under this article.

With a view to making the transfers, the tax obligations laid down under the valid law in the Contracting Party that receives the investment must be abided by.

The Contracting Parties undertake to facilitate the necessary procedures for making these transfers without excessive delay or restrictions. In particular, no more than two months must elapse from the date on which the investor has duly submitted the necessary applications for carrying out the transfer until the time when this transfer is actually made. Therefore, each Contracting Party undertakes to comply with the necessary formalities both for the purchase of the foreign exchange and for its effective transfer abroad before the above-mentioned deadline.

Article VIII

MORE FAVOURABLE TERMS

Terms more favourable than those of this Agreement that have been agreed by one of the Contracting Parties with investors of the other Contracting Party shall not be affected by this Agreement.

Article IX

SUBSTITUTION PRINCIPLE

In the event that a Contracting Party has issued a financial guarantee in respect of non-commercial risks in connection with an investment made by an investor of the other Contracting Party in the territory of that Contracting Party, the latter shall accept the application of the principle of substitution of the first Contracting Party in respect of the financial rights of the investor, through not the corporeal rights, from the time that the latter has made an initial payment chargeable to the guarantee issued.

This substitution will make it possible for the first Contracting Party to be the direct beneficiary of all the payments of compensation to which the initial investor could have been entitled. In no event may a substitution take place in respect of property, use, enjoyment or any other indefeasible right arising from ownership of the investment, without the pertinent authorisations pursuant to the law on

foreign investments in force in the Contracting Party where the investment was made having first been obtained.

Article X

DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES OVER THE INTERPRETATION OF THE AGREEMENT

1. Any dispute between the Contracting Parties relative to the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled, whenever possible, by the governments of the two Contracting Parties.

2. If it were not possible to settle the dispute in this way within six months of the start of negotiations, it shall be submitted, at the request of either of the two Contracting Parties, to a court of arbitration.

3. The court of arbitration shall be set up as follows: each Contracting Party shall appoint an arbitrator and these two arbitrators shall choose a citizen from a third state as president. The arbitrators shall be appointed within three months, and the president within five months, of the date on which either of the two Contracting Parties informs the other Contracting Party of its intention to submit the dispute to a court of arbitration.

4. If one of the Contracting Parties does not appoint its arbitrator within the established deadline, the other Contracting Party may ask the United Nations Secretary-General to make this appointment. In the event that the two arbitrators do not reach an agreement on the appointment of the third arbitrator within the established deadline, either of the two Contracting Parties may ask the United Nations Secretary-General to make the corresponding appointment.

5. The court of arbitration shall hand down its decision on the basis of respect for the law, of the provisions contained in this Agreement or in other agreements in force between the Contracting Parties, and in accordance with the universally recognised principles of international law.

6. Unless the Contracting Parties decide otherwise, the Court shall establish its own procedure.

7. The court shall take its decision by a majority of votes and it shall be final and binding on both Contracting Parties.

8. Each Contracting Party shall be responsible for the expenses of the arbitrator appointed by it and those related to representing it in the arbitration proceedings. The other expenses, including those of the president, shall be borne in equal measure by both Contracting Parties.

Article XI

DISPUTES BETWEEN A CONTRACTING PARTY AND INVESTORS OF THE OTHER CONTRACTING PARTY

1. Any dispute about investments that arises between one of the Contracting Parties and an investor of the other Contracting Party about issues regulated by this Agreement shall be notified in writing and shall include detailed information from the investor to the Contracting Party that is the recipient of the investment. Insofar

as possible the Parties shall attempt to settle their differences by means of a friendly agreement.

2. If it is not possible to settle the dispute in this way within six months from the date of written notification mentioned in paragraph 1, it shall be submitted, according to the investor's choice, to:

- The *ad hoc* court of arbitration set up under the Arbitration Regulations of the United Nations Commission for International Trade Law,¹ or
- The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) set up by the "Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States", open to signature in Washington on March 18th, 1965,² as soon as each State party to this agreement has acceded to the foregoing.

3. The arbitration shall be based on:

- The provisions of this Agreement;
- The domestic law of the Contracting Party in whose territory the investment was made, including the rules on conflicts of law, and
- The generally-accepted rules and principles of international law.

4. The arbitration decisions shall be final and binding on the parties to the dispute. Each Contracting Party undertakes to execute the decisions pursuant to its domestic law.

Article XII

ENTRY INTO FORCE, EXTENSION, DENUNCIATION

1. This Agreement shall enter into force on the day that the two Contracting Parties notify each other that the respective constitutional formalities required for the entry into force of international agreements have been complied with. It shall remain in force for an initial period of ten years and shall be tacitly renewed for consecutive five-year periods.

Each Contracting Party may denounce this Agreement by means of prior notification in writing, six months before the expiry date.

2. In the event of denunciation, the provisions contained in articles 1 to 11 of this Agreement shall continue to be applied during a ten-year period to investments made before the denunciation.

DONE in two equally authentic originals in Spanish, in Quito on June 26th, 1996.

For the Kingdom
of Spain:

JULIO ALBA DE LA CUESTA
Ambassador of Spain

For the Republic
of Ecuador:

MARCELO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA
Minister of Foreign Relations

Ad interim

¹ United Nations, *Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, Supplement No. 17 (A/31317)*, p. 34.

² United Nations, *Treaty Series*, vol. 575, p. 159.

[TRADUCTION — TRANSLATION]

ACCORD¹ ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE
DE L'ÉQUATEUR RELATIF À LA PROTECTION ET À LA PRO-
MOTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS

Le Royaume d'Espagne et la République de l'Équateur, ci-après dénommés
« les Parties contractantes »,

Désireux d'intensifier leur coopération économique au profit des deux pays,

Soucieux de créer des conditions favorables aux investissements réalisés par
des investisseurs de chacune des Parties contractantes sur le territoire de l'autre, et

Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements conformé-
ment au présent Accord sont de nature à stimuler les initiatives dans ce domaine,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

DÉFINITIONS

Aux fins du présent Accord :

1. Le terme « investisseurs » s'entend :

a) Dans le cas du Royaume d'Espagne, des personnes physiques qui sont con-
sidérées comme des nationaux, conformément à sa législation et, en ce qui concerne
la République de l'Équateur, des personnes physiques qui sont considérées comme
des nationaux de l'Équateur, conformément à la législation équatorienne.

b) Des personnes morales, y compris les sociétés, les groupements de sociétés,
sociétés commerciales et autres sociétés dûment constituées ou, en tout cas, dûment
organisées conformément au droit d'une Partie contractante et qui ont leur siège sur
le territoire de cette même Partie.

2. Le terme « investissements » désigne tout type d'avoirs, tels que les biens
et droits de toute nature, acquis conformément à la législation du pays qui reçoit les
investissements et, en particulier, mais non exclusivement, les suivants :

- Les actions et autres participations dans des sociétés;
- Les droits liés à tout type d'apports ayant pour objet la création d'une valeur
économique; et notamment tous les prêts octroyés à cette fin, capitalisés ou non;
- Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les
hypothèques, privilèges, usufruits et droits similaires;
- Tout type de droits liés à la propriété intellectuelle, et notamment les brevets
d'invention et marques de commerce, ainsi que les licences de fabrication et de
procédés techniques (savoir-faire);

¹ Entré en vigueur le 18 juin 1997 par notification, conformément à l'article XII.

— Tous droits liés à la réalisation d'activités économiques et commerciales autorisées par la loi ou en vertu d'un contrat, en particulier les concessions pour la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation des ressources naturelles.

3. L'expression « revenu des investissements » s'entend du produit d'un investissement, conformément à la définition figurant au point précédent, et englobe expressément les bénéfices, dividendes et intérêts.

4. Le terme « territoire » désigne le territoire national sur lequel chacune des Parties contractantes a juridiction ou exerce sa souveraineté, conformément au droit international et à la législation de chacune des Parties contractantes.

Article II

PROMOTION, ACCEPTATION

1. Chacune des Parties contractantes encourage, dans la mesure du possible, les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et accepte ces investissements conformément à ses dispositions légales.

2. Le présent Accord s'applique également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs d'une Partie contractante, conformément aux dispositions légales de l'autre Partie contractante sur le territoire de cette dernière.

Article III

PROTECTION

1. Chaque Partie contractante protège sur son territoire les investissements effectués, conformément à sa législation, par des investisseurs de l'autre Partie contractante, et ne fait pas obstacle, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, à la gestion, au maintien, à l'utilisation, à la jouissance, à l'extension, à la vente et, le cas échéant, à la liquidation de ces investissements.

2. Chaque Partie contractante s'efforce de délivrer les autorisations nécessaires en relation avec ces investissements et permet, dans le cadre de sa législation, l'exécution de contrats industriels de licences de fabrication et d'assistance technique, commerciale, financière et administrative.

3. Chaque Partie contractante s'efforce également, chaque fois que cela est nécessaire, d'accorder les autorisations requises pour ce qui a trait aux activités des consultants ou experts engagés par des investisseurs de l'autre Partie contractante.

Article IV

TRAITEMENT

1. Chaque Partie contractante assure sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante.

2. Ce traitement n'est pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie contractante aux investissements effectués sur son territoire par des investisseurs d'un pays tiers qui jouit du traitement de la nation la plus favorisée.

3. Ce traitement ne s'applique pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation à :

- Une zone de libre échange,
- Une union douanière,
- Un marché commun,
- Une organisation d'aide économique mutuelle, ou en vertu d'un accord signé avant la date de signature du présent Accord qui prévoit des dispositions analogues à celles qui sont accordées par cette Partie contractante aux participants à ladite organisation.

4. Le traitement accordé conformément au présent article ne s'applique pas aux abattements, exonérations fiscales ou autres privilèges analogues accordés par l'une ou l'autre des Parties contractantes à des investisseurs de pays tiers en vertu d'un accord visant à éviter la double imposition ou de tout autre accord en matière fiscale.

5. Outre les dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque Partie contractante applique aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante, conformément à sa législation nationale, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs.

Article V

NATIONALISATION ET EXPROPRIATION

La nationalisation, l'expropriation, ou toute autre mesure ayant un caractère ou des effets analogues qui pourrait être prise par les autorités de l'une des Parties contractantes à l'encontre des investissements réalisés par des investisseurs de l'autre Partie contractante sur son territoire doit être motivée exclusivement par des raisons d'utilité publique, conformément aux dispositions légales, et ne doit en aucun cas être discriminatoire. La Partie contractante qui prend de telles mesures verse à l'investisseur, ou à son ayant-droit, sans retard injustifié, une indemnité adéquate, en monnaie convertible et librement transférable.

Article VI

INDEMNISATION DES PERTES

Les investisseurs d'une Partie contractante dont les investissements ou les revenus des investissements sur le territoire de l'autre Partie ont subi des dommages pour cause de guerre ou autres conflits armés, état d'urgence national ou autres circonstances similaires se produisant sur le territoire de cette autre Partie contractante se voient accorder par cette dernière en matière de restitution, d'indemnisation, de compensation ou sous une autre forme un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investisseurs de tout Etat tiers. Tout paiement en vertu du présent article est effectué rapidement et avec efficacité, sous une forme appropriée, et son montant est librement transférable.

Article VII

TRANSFERTS

Chacune des Parties contractantes offre aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne les investissements effectués sur son territoire, la possibilité de transférer librement le produit de ces investissements ainsi que les autres paiements qui y sont liés et, en particulier, mais non exclusivement, les suivants :

- Le revenu des investissements, tel qu'il est défini à l'article premier;
- Les indemnités prévues à l'article V;
- Les compensations prévues à l'article VI;
- Le produit de la cession ou de la liquidation, totale ou partielle, des investissements;
- Les traitements, salaires et autres rémunérations perçues par les citoyens d'une Partie contractante qui ont obtenu de l'autre Partie contractante les permis nécessaires de travail en relation avec un investissement.

Les transferts se font en devises librement convertibles.

La Partie contractante qui reçoit l'investissement permet à l'investisseur de l'autre Partie contractante ou à la société dans laquelle il a investi l'accès au marché officiel des changes dans des conditions non discriminatoires, aux fins d'acquérir les devises nécessaires pour effectuer les transferts visés au présent article.

Les transferts doivent être réalisés conformément aux dispositions fiscales en vigueur dans la Partie qui reçoit l'investissement.

Les Parties contractantes s'engagent à faciliter les procédures nécessaires pour effectuer lesdits transferts sans retard excessif et sans restriction. En particulier, il ne devrait pas s'écouler plus de deux mois entre la date à laquelle l'investisseur a dûment présenté les demandes nécessaires pour effectuer le transfert et le moment effectif de ce transfert. En conséquence, chacune des Parties contractantes s'engage à remplir les formalités requises, tant pour l'acquisition des devises que pour leur transfert effectif à l'étranger avant l'expiration du délai susmentionné.

Article VIII

CAS DE CONDITIONS PLUS FAVORABLES

Le présent Accord ne porte pas atteinte aux conditions plus favorables que celles prévues dans le présent Accord dont serait convenue une des Parties contractantes avec des investisseurs de l'autre Partie contractante.

Article IX

PRINCIPE DE SUBROGATION

Si l'une des Parties a accordé une garantie financière contre des risques non commerciaux en relation avec un investissement effectué par un investisseur de cette Partie sur le territoire de l'autre Partie contractante, cette dernière accepte l'application du principe de subrogation de la Partie première nommée sur les droits économiques de l'investisseur, mais non sur les droits de propriété, et ceci dès le

moment où la Partie première nommée a effectué un premier paiement au titre de la garantie accordée.

Cette subrogation permet à la Partie première nommée d'être la bénéficiaire directe de tous les paiements au titre d'une indemnisation auxquels l'investisseur initial pourrait avoir droit. Il ne pourra exister en aucun cas de subrogation dans les droits de propriété, d'usage, de jouissance ou dans tout autre droit réel lié à la propriété de l'investissement sans autorisation préalable des autorités compétentes, conformément à la législation relative aux investissements étrangers en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où a été effectué l'investissement.

Article X

DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES CONCERNANT L'INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est résolu, dans la mesure du possible, par les gouvernements des deux Parties contractantes.

2. Si le différend ne peut être résolu de cette façon dans un délai de six mois à compter du début des négociations, il est soumis, à la requête de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage.

3. Le tribunal d'arbitrage est constitué de la façon suivante : chacune des Parties contractantes désigne un arbitre et ces deux arbitres élisent comme président un citoyen d'un Etat tiers. Les arbitres sont désignés dans un délai de trois mois et le Président dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a informé l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral.

4. Si l'une des Parties contractantes n'a pas désigné son arbitre dans le délai fixé, l'autre Partie contractante peut demander au Secrétaire général des Nations Unies de procéder à cette désignation. Si les deux arbitres désignés ne se mettent pas d'accord sur le choix du troisième arbitre dans le délai fixé, chacune des Parties contractantes peut solliciter du Secrétaire général des Nations Unies qu'il procède à sa désignation.

5. Le tribunal d'arbitrage rend sa sentence sur la base du respect de la loi, des règles énoncées dans le présent Accord ou dans d'autres accords en vigueur entre les Parties contractantes et sur les principes universellement admis du droit international.

6. A moins que les Parties contractantes n'en décident autrement, le tribunal arrête sa procédure.

7. Le tribunal prend sa décision à la majorité des voix; cette décision est définitive et a force obligatoire pour les deux Parties contractantes.

8. Chacune des Parties contractantes prend à sa charge les frais de l'arbitre désigné par elle ainsi que ceux de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les autres frais, y compris ceux du Président, sont partagés équitablement entre les deux Parties contractantes.

Article XI

DIFFÉRENDS ENTRE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ET DES INVESTISSEURS DE L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE

1. Tout différend relatif aux investissements qui s'élèverait entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante à propos de questions régies par le présent Accord est notifié, par écrit, accompagné d'une information détaillée, par l'investisseur à la Partie qui a reçu l'investissement. Dans la mesure du possible, les Parties s'efforcent de régler ces différends à l'amiable.

2. Si les différends ne peuvent être réglés de cette façon dans un délai de six mois à compter de la date de la notification écrite mentionnée au paragraphe 1, le différend est soumis, au choix de l'investisseur :

— Au tribunal d'arbitrage spécial institué par le Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international¹, ou Au Centre international de règlement des différends en matière d'investissements (CIADI) créé par la « Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats », ouvert à la signature à Washington le 18 mars 1965², si chacun des Etats parties au présent Accord a adhéré à cette Convention.

3. L'arbitrage est régi :

- Par les dispositions du présent Accord,
- Par le droit national de la Partie contractante sur le territoire de laquelle a été effectué l'investissement, y compris les règles applicables aux conflits de droit et
- Par les règles et principes généralement admis du droit international.

4. Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires pour les Parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences conformément à sa législation nationale.

Article XII

ENTRÉE EN VIGUEUR, PROROGATION, DÉNONCIATION

1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties contractantes se seront notifiées mutuellement que les formalités constitutionnelles respectives requises pour l'entrée en vigueur des accords internationaux ont été accomplies. Il restera en vigueur pour une durée initiale de dix ans, puis sera reconduit tacitement pour des périodes consécutives de cinq ans.

Chacune des Parties contractantes pourra dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit six mois avant la date de son expiration.

2. En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1 à 11 du présent Accord continueront à s'appliquer pendant dix autres années aux investissements effectués avant la dénonciation.

¹ Nations Unies, *Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-et-unième session, Supplément n° 17 (A/31/17)*, p. 36.

² Nations Unies, *Recueil des Traités*, vol. 575, p. 159.

FAIT en deux exemplaires originaux en langue espagnole, faisant également foi,
à Quito le 26 juin 1996.

Pour le Royaume
d'Espagne :

L'Ambassadeur d'Espagne,
JULIO ALBI DE LA CUESTA

Pour la République
de l'Équateur :

Le Ministre des relations extérieures,
MARCELO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA
